

Acciones para lograr un mercado eléctrico sostenible

JOSÉ MARÍA BLANCO

La producción de insumos energéticos -como la electricidad-, a diferencia de lo que sucede en otros mercados, no se logra sin un componente significativo de incidencia política. En este artículo se analiza varios elementos que condicionan la evolución sostenible del mercado energético con una visión de política pública y se expone algunas reflexiones sobre cómo lograr su sostenibilidad -en un contexto mundial cada vez más preocupado en detener los efectos adversos del cambio climático- y cómo emprender el desarrollo de las grandes obras de infraestructura eléctrica en un entorno financiero limitado.

Si bien es cierto que a nivel nacional la inversión pública en electrificación casi llega a todos los hogares costarricenses, el apetito por más electricidad continuará aumentando, a pesar de la crisis económica global y de una economía -la costarricense- que muestra síntomas de recesión en 2009. Con un crecimiento de la demanda promedio cercana al 5 %, se estima que anualmente deben agregarse al sistema interconectado nacional al menos unos 100 megavatios de potencia adicional con respecto al año base 2005. Aunado a ello, es tiempo de considerar en los modelos de planificadores eléctricos la posible transformación de la flota automotriz hacia los vehículos eléctricos con bajas emisiones de carbono, cambio que podría aparecer comercialmente a partir de 2012, cuando los grandes fabricantes automotrices empiecen a comercializar masivamente esa nueva forma de transporte. Entonces, cabe preguntarse: ¿qué tipo de fuentes energéticas domésticas deben desarrollarse en el mediano y el largo plazos?

Otra tarea pendiente es el uso final más eficiente de la electricidad en todos los sectores de consumo de la matriz energética nacional. Para un país que alcanza un índice de cobertura eléctrica cercano al 100 %, es imperativo incorporar políticas públicas más agresivas en los mercados eléctricos, mediante instrumentos como: (1) incentivos fiscales para promover los equipos eléctricos más eficientes -como sistemas de iluminación, motores, acondicionadores de aire y equipos de refrigeración-; (2) disponibilidad de financiamiento no convencional para que los clientes de las empresas eléctricas distribuidoras puedan acceder a esquemas de crédito en condiciones favorables -por ejemplo, donde puedan amortizar sus inversiones en la misma factura eléctrica-, y (3) evaluar diferentes esquemas de subsidios para el reemplazo de equipos eléctricos ineficientes, ya que es más barato ahorrar un kilovatio-hora que generarlo. Entonces, vale preguntarse: ¿cuál debe ser la política pública para amortiguar ese apetito con eficiencia energética en el sector eléctrico?

Por otra parte, en años recientes el esquema de generación de electricidad muestra un porcentaje creciente hacia la generación mediante el consumo de hidrocarburos importados y ha quedado demostrado que la factura petrolera es una carga financiera muy alta, donde el 80 % se consume en el sector transporte y el 20 % en la generación de electricidad. Entonces: ¿cuál es la política pública, con una visión de largo plazo, para promover un transporte sostenible, energéticamente eficiente -como sería volver al uso del ferrocarril eléctrico asociado a un reordenamiento del espacio-?

Existe un cuarto elemento, que emerge recientemente como una oportunidad, asociado al desarrollo de los mercados eléctricos sostenibles: el cambio climático y la equidad social. El comercio internacional de créditos de carbono asociado a los proyectos de generación eléctrica con fuentes renovables de energía debe ser una oportunidad de negocio para todos: para los compradores en los países desarrollados y para las empresas que generan los créditos, y debería serlo también para las poblaciones locales. Entonces, vale preguntarse: ¿cómo fortalecer una política pública en relación con el cambio climático y la generación eléctrica con energía renovable que garantice una incidencia social participativa?

Sin ser exhaustivo en el análisis, y habiendo mencionado esos cuatro elementos que condicionan en la actualidad el marco de política pública en el sector eléctrico, se expone a continuación cuatro acciones de política que -según parecer del autor- favorecerían el desarrollo de los mercados energéticos sostenibles:

En primera instancia, es necesario acoplar la política energética a las políticas del sector transporte; es decir, es necesario aumentar la seguridad energética nacional reduciendo la factura petrolera donde más duele, en el

consumo insostenible de hidrocarburos. Para ello, se debe ajustar la política energética con la política pública en materia de transporte; por ejemplo, desarrollando una mayor inversión pública en infraestructura terrestre (i.e.: transporte ferroviario electrificado y ciclo-vías) y aumentar la calidad del transporte público -especialmente en el casco urbano de la Gran Área Metropolitana y en las principales cabeceras de provincia-, lo cual necesariamente va a cambiar el paradigma actual del consumo de electricidad aumentando la intensidad eléctrica del sector transporte.

Por otra parte, es necesario regresar a los principios que fundamentaron el desarrollo eléctrico nacional en la década de los cuarenta; es decir, Costa Rica debe contar con planes de inversión en energía renovable con una visión de largo plazo. La realidad de una década reciente de petróleo barato y la intromisión política en las decisiones técnicas hizo que se fuera perdiendo seguridad nacional en materia energética, al aumentar la generación térmica con base en combustibles fósiles importados. En un contexto político-electoral, donde las políticas públicas cambian con cada administración, es necesario formular planes y programas con una visión de largo plazo, como lo requiere la planificación, el diseño y la construcción de las grandes obras de infraestructura eléctrica.

La tercera acción se refiere a una oportunidad inmediata que ofrece la eficiencia energética, como la forma de generación evitada de más bajo costo. Desde el año 2005 se formuló y se ejecuta regionalmente una Estrategia de Política en Eficiencia Energética en el Sector Eléctrico, aprobada por las autoridades centroamericanas, la cual presenta un conjunto de lineamientos para desarrollar estos mercados emergentes integrando políticas públicas, el interés de los importadores de equipos y la participación activa de los usuarios finales, con una visión de largo plazo. La Estrategia es un buen punto de partida para que los tomadores de decisiones a nivel político emprendan las acciones para atender la creciente demanda de una sociedad cada vez más electrificada. Por ejemplo, en materia de eficiencia energética se debe cumplir con las normas técnicas de consumo mínimo y el etiquetado para los principales equipos eléctricos, establecer los requerimientos mínimos de consumo en la flota vehicular y garantizar las edificaciones energéticamente eficientes -entre otras medidas-, como motor de la transformación de los mercados de eficiencia energética.

El cuarto eje de acción es el que se relaciona con el cambio climático y la energía sustentable. En el contexto global, los países centroamericanos se consideran zonas de alto riesgo ante los efectos del cambio climático, originados por el sobrecalentamiento de la atmósfera. Los próximos meses serán interesantes en cuanto a las políticas globales relacionadas con el cambio climático. El presidente Obama ha indicado con expresa claridad que su administración establecerá metas anuales para reducir al año 2020 los niveles de emisiones calculados con respecto a 1990, lo cual va a tener un impacto sin precedentes en los marcos de negociación internacionales, junto a cambios sustantivos en la política exterior norteamericana, donde se habla de una “recuperación verde”, es decir una recuperación basada en tecnologías sustentables, no simplemente en gasto de consumo -como es el caso de los grandes fabricantes automotrices-, lo cual será una gran oportunidad para reposicionar a la región -y a Costa Rica- en el tema de la generación eléctrica aprovechando su amplio potencial de energía renovable.

Los aspectos comentados no son nuevos, sino en gran medida son temas recurrentes que deben resolverse en Costa Rica y en el entorno centroamericano, y ellos se agravan ahora con la volatilidad del petróleo importado, el reconocimiento de los efectos adversos del calentamiento global y la necesidad de atender -con mayor equidad social- a los sectores de población socialmente más vulnerables, que viven en condiciones de pobreza y que enfrentan con mayor vulnerabilidad la crisis económica global. Los usuarios del sector eléctrico estamos acostumbrados a demandar lo que queremos -cuando lo queremos-, y de ahí la necesidad de iniciar lo antes posible una transición energética planteando políticas públicas claras que aceleren un desarrollo energético sostenible con una visión de largo plazo, donde se priorice mediante incentivos la generación eléctrica con fuentes renovables de energía, se desarrollen los mercados de eficiencia energética en torno al uso final de la electricidad en todos los sectores de consumo y se diversifique el transporte de bienes y personas cambiando el uso actual de hidrocarburos importados por transporte masivo electrificado.